REPÚBLICA DE COLOMBIA - RAMA JUDICIAL



TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CALI SALA DE DECISIÓN LABORAL

| PROCESO | ORDINARIO LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA |
|------------|---|
| DEMANDANTE | FLOR MARÍA VALENCIA PERLAZA |
| | JAIME MONTOYA PULIDO, INSTITUTO OCULAR DE |
| DEMANDADOS | OCCIDENTE LTDA., ANDRÉS MONTOYA FRANCO Y |
| | SANTIAGO MONTOYA FRANCO |
| RADICACIÓN | 76001310500220150006701 |
| TEMA | CONTRATO DE TRABAJO |
| DECISIÓN | SE MODIFICA LA SENTENCIA CONDENATORIA |
| | APELADA |

AUDIENCIA PÚBLICA No. 516

En Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de dos mil veintitrés (2023), el magistrado ponente **GERMÁN VARELA COLLAZOS**, en asocio de sus homólogas integrantes de la Sala de Decisión Laboral, **MARY ELENA SOLARTE MELO** y **ALEJANDRA MARÍA ALZATE VERGARA**, se constituyeron en audiencia pública con el objeto de proferir la siguiente sentencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, en la que se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra la sentencia No. 131 del 17 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cali.

SENTENCIA No. 373

I. ANTECEDENTES

FLOR MARÍA VALENCIA PERLAZA demanda a JAIME MONTOYA PULIDO, al INSTITUTO OCULAR DE OCCIDENTE LTDA., a ANDRÉS MONTOYA FRANCO y a SANTIAGO MONTOYA FRANCO, con el fin de que se declare la existencia de un contrato de trabajo desde el 30 de agosto de 1990 hasta el 3 de diciembre de 2014, como empleadores solidarios responsables. Pide se condene al pago del auxilio de cesantía, intereses sobre la cesantía, prima de servicios, vacaciones, salarios, aportes a la seguridad en salud y pensión, la sanción moratoria por la no consignación del auxilio de cesantía en un fondo de cesantía, la indemnización moratoria del artículo 65 del C.S.T. modificado por el artíuclo 29 de la Ley 789 de 2022, y la indemnización por despido injusto.

La demandante manifiesta que se vinculó a laborar el 30 de agosto de 1990 con Jaime Montoya Pulido, para prestar sus servicios como empleada doméstica interna en la residencia de la familia Montoya Franco; que el 25 de noviembre de 2014 fue notificada de la terminación del contrato de trabajo; que el 10 de septiembre de 2004 fue afiliada a PORVENIR al sistema de seguridad social en pensión y el 2 de mayo de 2008 en salud; que cuando los hijos de la familia Montoya Franco, Santiago y Andrés conformaron sus propios hogares, se dispuso que la actora fuera dos días de cada semana a la casa de ellos y, luego, seguía trabajando en la casa de Jaime Montoya Pulido, quien siguió pagando la contraprestación salarial directamente o través del Instituto Ocular de Occidente Ltda.; que prestó sus servicios hasta el 3 de diciembre de 2014 y su último salario fue la suma de \$616.000,00; que la relación laboral se demuestra con las certificaciones que en seis ocasiones le entregó su empleador.

El apoderado judicial de JAIME MONTOYA PULIDO y el INSTITUTO **OCULAR DE OCCIDENTE LTDA.** al contestar la demanda señalaron que la demandante laboró para Jaime Montoya Pulido como persona natural a partir del 1° de enero de 2003 mediante diferentes contratos a término fijo inferiores a un año, hasta el 28 de abril de 2008 cuando presentó la M.P. GERMAN VARELA COLLAZOS

renuncia; que a partir del 1° de mayo de 2008 fue contratada mediante la

misma modalidad por el Instituto Ocular de Occidente Ltda., hasta el 30 de

noviembre de 2014; que es cierto lo relacionado con la afiliación al sistema

de seguridad social en pensión y salud y, que, es cierto que debió afiliarla

en pensión desde enero de 2003 cuando ingresó a laborar; que durante la

vigencia de las relaciones laborales indicadas se liquidaron y pagaron a la

demandante los salarios y prestaciones sociales; que la certificación

expedida el 15 de julio de 2006 por Jaime Montoya Pulido "se trata de una

mentira piadosa con el fin de que aplicara a un subsidio de vivienda". Se

opuso a las pretensiones de la demanda y propuso la excepción de

prescripción, entre otras.

SANTIAGO MONTOYA FRANCO se opuso a las pretensiones y propuso la

excepción de prescripción.

ANDRÉS MONTOYA FRANCO fue representado por curadora Ad Litem,

quien señaló que no le constan los hechos de la demanda y que, no se

opone a las pretensiones siempre y cuando se prueben los hechos de la

demanda.

II. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La juzgadora de instancia condenó a JAIME MONTOYA PULIDO como

persona natural a pagar al sistema de seguridad social en pensiones y a

favor de FLOR MARÍA VALENCIA PERLAZA los aportes en PORVENIR

causados entre el 1 de enero de 2003 al 31 de agosto de 2004. Absolvió

de las demás pretensiones de la demanda. La juez no declaró la existencia

del contrato de trabajo desde agosto de 1990 como se solicita en la

demanda, porque en su sentir con las demás pruebas aportadas al

proceso se desvirtuó la certificación laboral expedida por el demandado

Jaime Montoya Pulido el 15 de julio de 2006.

III. RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de la demandante interpuso el recurso de apelación

y señala que con las pruebas documentales como las certificaciones

laborales y testimoniales sí quedó demostrado que la demandante llegó a

trabajar a la casa de Jaime Montoya Pulido como empleada del servicio

doméstico desde agosto de 1990, por lo que solicita que se ordene el pago

de los aportes a pensión desde esa fecha.

Una vez surtido el traslado de conformidad a lo establecido en el artículo 13

de la Ley 2213 del 13 de junio de 2022, no se presentaron alegatos.

IV. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS

PROBLEMAS JURÍDICOS A RESOLVER

De conformidad con el principio de consonancia establecido en el artículo

66A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social en

concordancia con lo regulado por el artículo 305 del Código de

Procedimiento Civil, hoy 281 del Código General del Proceso, la Sala se

limita a resolver los siguientes problemas jurídicos planteados en el

recurso de apelación: i) si se configuró o no una relación laboral entre FLOR

MARÍA VALENCIA y JAIME MONTOYA PULIDO desde agosto de 1990 o,

si lo fue desde el 1° enero de 2003 como lo declaró la juez, en caso de ser

la primera fecha; ii) si se debe condenar a JAIME MONTOYA PULIDO al

pago de las cotizaciones a pensión a favor de la actora desde el mes de

agosto de 1990.

TESIS QUE LA SALA DEFIENDE

La Sala defiende la tesis que la sentencia de instancia se debe modificar

por cuanto está demostrada la prestación personal del servicio de la actora

para el demandado desde el mes de agosto de 1990, y la parte

demandada no desvirtuó la continua dependencia y subordinación de la

demandante para con JAIME MONTOYA PULIDO. Todo lo contrario, la

prueba documental y testimonial ratifican la relación laboral. Veamos como

se prueba esta aseveración.

DEL CONTRATO DE TRABAJO

Sabido es que, el contrato de trabajo está definido en el artículo 22 del

C.S.T., y sus elementos esenciales los señala el artículo 23 del mismo

ordenamiento. Según esta última norma, para que se predique la

existencia de un contrato de trabajo es menester que confluyan la

prestación personal del servicio por parte del trabajador, la continuada

dependencia o subordinación de quien lo brinda, y un salario como

retribución, siendo contundente el artículo al definir a renglón seguido que,

una vez reunidos los anteriores tres elementos, no dejará de serlo por

razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que

se le agreguen.

Sin embargo, el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo estableció

una presunción legal, en el sentido de que toda prestación personal de

servicios se debe tener como en ejecución de un contrato laboral.

Entonces, resulta de la última norma, que corresponde a quien se convoca

como empleadora, desvirtuar aquella presunción.

Así se ha señalado por la jurisprudencia sin vacilaciones y en reiteradas

oportunidades, basta citar las siguientes providencias: sentencias C-665

de 1998; T-694 de 2010; Corte Suprema de Justicia 7 de julio de 2005

expediente 24476; Corte Suprema de Justicia, radicación 41.579 del 23 de

octubre de 23012; SL 8643 de 2015 radicación No. 39.123 del 20 de mayo

de 2015; SL4912-2020 radicación 76645 del 01 de diciembre de 2020,

entre otras. Digamos que este es el ABC del derecho sustantivo laboral.

En ese orden de ideas, al no desvirtuarse la subordinación ésta se presume

de conformidad con el artículo 24 del Código Sustantivo del Trabajo. No

obstante, la mencionada presunción que es simplemente legal puede ser

desvirtuada con la demostración del hecho contrario al presumido. Por

ejemplo, que el servicio no se prestó bajo un régimen contractual laboral;

porque quien lo ejecutó no lo hizo con el ánimo de ser retribuido, o en

cumplimiento de una obligación que no le impusiera dependencia o

subordinación, o que se prestó el servicio para persona diferente a la

convocada. Esta carga corre por cuenta del extremo pasivo de la litis.

Encasillando las premisas anteriores al caso que nos ocupa, la Sala

defiende la tesis que, contrario a lo manifestado por la juez, con las pruebas

valoradas en su conjunto no se desvirtúa la prestación personal del servicio

de la demandante desde agosto de 1990, ni la continuada dependencia y

subordinación ni el salario indicado en la certificación laboral expedida por

JAIME MONTOYA PULIDO el 15 de julio de 2006 visible a folio 15 del

PDF01 del cuaderno del juzgado, la que indicó literalmente lo siguiente,

CERTIFICO

Que la señora FLOR MARIA VALENCIA PERLAZA, identificada con la Cédula de Ciudadanía No 29.121.333 de Cali,

labora como empleada Interna del Dr. Jaime Montoya Pulido, desde Agosto de 1990, devengando unos Ingresos mensuales de

QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. (\$ 500.000.00).

PARA CONSTANCIA SE FIRMA A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE JULIO DEL DOS MIL SEIS (15-07-2006).

Dr. JAINE MONTOYA P.

La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 23 de septiembre de 2009 radicado 36748 ha adoctrinado frente a la valoración de las constancias de trabajo que:

"(...) El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se expresó en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicio y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de su prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral".

Esta jurisprudencia sobre el valor probatorio de las constancias de trabajo expedidas durante la ejecución del contrato de trabajo o a su terminación se ha reiterado en las sentencias del 8 de marzo de 1996 radicado 8360; en la providencia del 2 de agosto de 2004 radicación 22259, en la SL 16528-2016 del 26 de octubre de 2016 radicación No. 46704, en la SL6621-2017, SL516-2021 y, más recientemente en la SL-1499-2021 del 28 de abril de 2021. En la sentencia SL1816-2023 del 19 de julio de 2023 repitió que,

"(...) En cuanto a la valoración de certificaciones laborales expedidas por el empleador y que dejan constancia del tiempo de servicios, pagos, etc, esta Sala de Casación ha enseñado que gozan de plena eficacia probatoria y que el juzgador debe partir de su veracidad, pues no es usual que en estos casos se falte a la verdad, en tanto la responsabilidad patrimonial que ello puede generar, y es justamente por esa razón que si en el proceso judicial el demandado pretende desvirtuar el hecho admitido, debe hacerlo con argumentos que no dejen vestigio de duda, recayendo en el sentenciador el deber de un análisis de la prueba en estricto rigor.

Así quedó expuesto en sentencia CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360, reiterada en CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666:

En esta línea de pensamiento, es oportuno resaltar que esta Corporación, respecto a los hechos expresados en los certificados laborales, ha sostenido que deben reputarse como ciertos, a menos que el empleador demandado acredite contundentemente que lo registrado en esas constancias no se aviene a la verdad. Por ejemplo, en sentencia SL14426-2014, en la que se reiteró el criterio expuesto en los fallos SL 8360, 8 mar. 1996, SL 36748, 23 sept. 2009, SL 34393, 24 ago. 2010 y SL 38666, 30 abr. 2013, señaló:

M.P. GERMAN VARELA COLLAZOS Radicación: 760013105-002-2015-00067-01

[...] Sobre el valor probatorio de los certificados laborales, esta Sala de Casación en sentencia CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360, reiterada en CSJ SL, 23 sept. 2009, rad. 36748, CSJ SL, 24 ago. 2010, rad. 34393, CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666, señaló:

El juez laboral debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo, ya sea, como en este caso, sobre el tiempo de servicios y el salario, o sobre otro tema, pues no es usual que una persona falte a la verdad y dé razón documental de la existencia de aspectos tan importantes que comprometen su responsabilidad patrimonial o que el juez cohoneste este tipo de conductas eventualmente fraudulentas. Por esa razón, la carga de probar en contra de lo que certifique el propio empleador corre por su cuenta y debe ser de tal contundencia que no deje sombra de duda, de manera que, para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario y no atenerse a la referencia genérica que haga cualquier testigo sobre constancias falsas de tiempo de servicios y salario o sobre cualquier otro tema de la relación laboral.

De acuerdo con lo expuesto, el contenido de la aludida certificación debe reputarse como cierto, a menos que el empleador demandado acredite fehacientemente, que lo registrado en ella no se ajusta a la verdad o lo desvirtúe con otros medios de acreditación. Dicho con otras palabras, en algunos eventos es factible apartarse de lo consignado en constancias o certificaciones emitidas por el empleador, pero ello es posible siempre y cuando se verifique que es contrario a la verdad real y procesal (sentencias CSJ SL4296-2022, CSJ SL2600-2018). (...)"

Y, en la reciente sentencia SL2523-2023 del 11 de septiembre de 2023 se expuso lo siguiente:

- "(...) Lo último, principalmente, porque de la manera en que lo consideró el colegiado, al tenor de lo explicado, entre muchas otras, en las sentencias CSJ SL, 8 mar. 1996, rad. 8360; CSJ SL, 23 sept. 2009, rad. 36748; CSJ SL, 24 ag. 2010, rad. 34393; CSJ SL, 30 abr. 2013, rad. 38666 y CSJ SL14426-2014, reiteradas en la CSJ SL6621-2017:
- i) el juez del trabajo debe tener como un hecho cierto el contenido de lo que se exprese en «cualquier constancia que expida el empleador sobre temas relacionados con el contrato de trabajo»;
- ii) la carga de probar en contra de lo certificado corre por su cuenta y,
- iii) el cumplimiento de esta debe ser contundente, por lo que, «para destruir el hecho admitido documentalmente, el juez debiera acentuar el rigor de su juicio valorativo de la prueba en contrario». (...)"

Ahora, al aplicar lo expuesto por la jurisprudencia al caso concreto, se tiene que el mismo Jaime Montoya Pulido al contestar la demanda no desconoce

M.P. GERMAN VARELA COLLAZOS Radicación: 760013105–002-2015-00067-01

que expidió la referida certificación del 15 de julio de 2006, lo que argumentó

es que "se trata de una mentira piadosa con el fin de que aplicara a un

subsidio de vivienda", situación que no fue desvirtuada en este proceso, por

cuanto no aportó prueba alguna que permitiera siquiera medianamente

inferir que la actora para dicha fecha aplicó para un subsidio de vivienda

valiéndose de lo indicado en la certificación laboral. Era su carga probatoria.

Y, con las pruebas aportadas no se hace añicos el contenido de la

mencionada certificación ni tampoco se desvirtúa la continuada

dependencia y subordinación; y antes ratifican su contenido y demuestran

que la relación con la persona natural JAIME MONTOYA PULIDO se

extendió más allá del 15 de julio de 2006 cuando se expidió la certificación

laboral, esto es, por lo menos hasta el 28 de abril de 2008 cuando presentó

la carta de renuncia obrante a folio 245 del PDF01 y continuó su vinculación

con el Instituto Ocular de Occidente hasta el 30 de noviembre de 2014, folio

272 del mismo PDF.

Al respecto, la testigo ISMENIA MILENA PALACIOS MOSQUERA dijo

conocer a la demandante hace 28 años porque casualmente laboraba en el

edificio de enseguida al que ella trabajaba, que también compartieron

vivienda por tres años desde 2008; afirmó que la actora trabajaba con Jaime

Montoya como interna en un edificio en el barrio el Peñón, se encargaba de

las labores de la casa, también le ayudaba a "criar" los hijos, porque cuando

ella llegó a laborar todavía eran menores de edad; afirma que ella trabajó

para Jaime Montoya por 25 años; lo sabe porque compartían vivienda, a

veces iba a donde ella trabajaba a llevarle algo y la esperaba para irse en el

mismo transporte los fines de semana.

ELMER ARTURO SOLIS BANGUERA dijo que conoce a la demandante Flor

María Valencia desde el año 2000 cuando ella alquilaba una pieza en la

causa de su tío en el barrio Alfonso López y que, en el año 2001 empezaron

una relación sentimental (tienen dos hijos) y se enteró que ella trabajaba

7-01

para el médico Jaime Montoya para esa fecha; que en el año 2006 ella le

colaboró con el papá del doctor Jaime Montoya para conseguir un empleo,

por eso conoce que sí laborara con esa persona porque también trabajó para

ellos en una compraventa en Tequendama por espacio de 8 años; sabe que

ella se desempeñaba como interna en el oficio de "servicios generales, o

sea, laboraba en el apartamento del doctor Jaime Montoya, de hecho, pues

sí, exactamente, de hecho, pues yo tenía el acceso, pues por trabajar con la

familia" para realizar algún arreglo; que el edificio se llama el Peñón y los

últimos años que laboró ella eran por días de lunes a sábado y le pagaban

un salario mínimo.

Contrario a lo señalado por la juez, con los anteriores testimonios se ratifica

la prestación personal del servicio de la demandante para JAIME

MONTOYA PULIDO, así como lo expresado por este en la certificación

laboral referida del 15 de julio de 2006, la cual no fue desvirtuada se reitera;

lo que lleva a concluir la existencia del contrato de trabajo por lo menos

desde el 31 de agosto de 1990 toda vez que en la certificación no se indicó

el día de agosto en que empezó a trabajar, sino que fue desde agosto de

1990.

Así las cosas, y como quiera que el demandado JAIME MONTOYA PULIDO

afilió a la demandante al fondo de pensiones Porvenir desde el mes de

septiembre de 2004, folio 279 del PDF01, se modificará el numeral primero

de la sentencia apelada que condenó al pago de los aportes a pensión

desde el 1° de enero de 2003, para en su lugar condenar a JAIME

MONTOYA PULIDO a pagar los aportes a pensión a favor de FLOR MARÍA

VALENCIA PERLAZA con destino al fondo de pensiones PORVENIR,

causados desde el 31 de agosto de 1990 hasta el 31 de agosto de 2004

con base en un salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad,

tal como señala la ley, en lo demás se confirma el numeral.

Los indicados aportes a pensión no son objeto de prescripción, toda vez

que se constituyen como parte fundamental para la financiación y el

reconocimiento de la pensión de vejez, la cual es de carácter vitalicia. A

modo de ejemplos se pueden consultas las sentencias de la Corte Suprema

de Justicia SL738-2018 del 14 de marzo de 2018 radicación 33330,

SL1515-2018, SL5535-2018 del 28 de noviembre de 2018, entre otras.

Por las razones expuestas se modifica la sentencia apelada. Costas en

esta instancia a cargo de JAIME MONTOYA PULIDO y a favor de la

demandante, se ordena incluir en la liquidación la suma de un salario

mínimo legal vigente como agencias en derecho, de conformidad a lo

dispuesto en el artículo 5 numeral 1 del Acuerdo No. PSAA16-10554 de

agosto 5 de 2016.

V. DECISIÓN

Sin más consideraciones, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior

del Distrito Judicial de Cali, administrando justicia en nombre de la

República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: MODIFICAR el numeral PRIMERO de la sentencia apelada No.

131 del 17 de junio de 2022, proferida por el Juzgado Segundo Laboral del

Circuito de Cali, en el sentido de indicar que se CONDENA a JAIME

MONTOYA PULIDO a pagar los aportes a pensión a favor de FLOR MARÍA

VALENCIA PERLAZA con destino al fondo de pensiones PORVENIR,

causados desde el 31 de agosto de 1990 hasta el 31 de agosto de 2004

con base en un salario mínimo mensual legal vigente para cada anualidad,

en los términos se señalados por la ley y, por las razones expuestas en la

M.P. GERMAN VARELA COLLAZOS Radicación: 760013105-002-2015-00067-01

Interno: 19319

parte considerativa de esta providencia. En lo demás se confirma el numeral y la sentencia apelada.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de JAIME MONTOYA PULIDO y a favor de la demandante, se ordena incluir en la liquidación la suma de un salario mínimo legal vigente como agencias en derecho.

Esta providencia queda notificada y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente de su notificación por EDICTO en el portal web: https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-cali-sala-laboral/146

No siendo otro el objeto de la presente diligencia, así se termina. Intervinieron los Magistrados,

GERMÁN VARELA COLLAZOS

MARY ELENA SOLARTE MELO

ALEJANDRA MARÍA ALZATE VERGARA

Firmado Por:

German Varela Collazos

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 002 Laboral

Tribunal Superior De Cali - Valle Del Cauca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: ecf9768b7f102c03a6f5663e3a7431ed1ca43fb7819e80dd2542832a97b8cdbe

Documento generado en 19/12/2023 06:34:48 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica